

NUEVA ZELANDA: «NUNCA MÁS», UNA INVESTIGACIÓN PÚBLICA SOBRE LOS ABUSOS EN EL PASADO EN CENTROS DE ACOGIDA.

Resumen

Grupos de antiguos residentes de centros de acogida, maoríes y personas con discapacidad de Nueva Zelanda llevan veinte años solicitando una investigación independiente sobre las causas fundamentales de los errores generalizados en el sistema nacional de acogida. El Gobierno de Nueva Zelanda, que se oponía notablemente a llevar a cabo una investigación pública sobre los abusos en las instituciones infantiles, accedió finalmente en febrero de 2018, cuando anunció la Comisión Real de Investigación sobre Abusos en el Pasado en Centros de Acogida.

Contexto

Más de 100 000 niños y niñas de Nueva Zelanda se vieron separados de sus familias y alojados en centros de acogida entre 1950 y 1992. Entre estos centros se incluían casas de acogida, orfanatos, hospitales psiquiátricos, campamentos de salud, hogares de protección infantil y hogares de educación especial. Algunos menores se llevaban a estas instituciones por faltas tan nimias como robar un lápiz o saltarse las clases. Otros acababan en estos hogares tras haber sufrido problemas familiares.

Casi la mitad de los niños y las niñas en lugares de acogida estatales en la década de 1970 eran de origen maorí y en algunas instituciones constituían el 80 por ciento de los

residentes. La institucionalización se produjo, en parte, como respuesta al elevado número de indígenas que se mudaron a las ciudades tras la Segunda Guerra Mundial en busca de mejores oportunidades. Mientras que sus padres trabajaban muchas horas para llegar a fin de mes, los niños y las niñas a menudo se quedaban solos. También algunos niños y niñas con dificultades de aprendizaje [se vieron separados a la fuerza](#) de sus familias en un intento de que la sociedad se ajustara a lo que se considera el ideal de ciudadanos blancos europeos sin discapacidad.

A muchos y muchas se les alejó del amor de sus familias para acabar en instituciones abarrotadas en las que sufrieron abusos sexuales y maltrato físico y psicológico, así como abandono, durante muchos años. Como consecuencia, este intenso trauma relacionado con el abuso infantil en las instituciones a menudo causaba problemas de salud física y mental en la edad adulta.

Los datos muestran que más del [40 por ciento](#) de los reclusos de Nueva Zelanda pasó su infancia en instituciones estatales como centros de acogida, y hasta el 80 por ciento de los residentes de algunos centros de niños han terminado en prisión en la edad adulta.

La historia de Netta Christian

Netta Christian, una abuela viuda de Hamilton, Nueva Zelanda, pasó casi 20 años en una casa de acogida. En 2002, [comenzó a pedir una compensación](#) por el maltrato físico y psicológico y los abusos sexuales que vivió durante ese tiempo, pero se sintió ultrajada cuando tuvo que gastarse su compensación de 10 000 dólares neozelandeses en los honorarios de su abogada. Desde entonces ha dedicado su vida a mejorar el sistema. En 2011, Christian, con 73 años, publicó un anuncio público en el periódico *New Zealand Herald* en el que narraba los daños que sufrió en la infancia. No obstante, el periódico se interesó por su historia y publicó un artículo en primera página, lo que animó a mucha gente a contactar con ella para pedir consejo y ayuda.

A raíz de esto, Christian se puso en contacto con la Red de Australia de Antiguos Residentes («Care Leavers Australia Network», o CLAN), y trabajó con ellos para fundar la rama de la organización para Nueva Zelanda, la cual dirige con Pat McNair, esposa de un antiguo residente y representante de la sección de Nueva Zelanda de CLAN (CLAN NZ). Su objetivo es alcanzar la justicia y la reparación para todos los neozelandeses y neozelandesas que vivieron en orfanatos, instituciones o centros y hogares de acogida. CLAN NZ es un grupo de cinco activistas que trabajan de forma voluntaria y, desde principios de 2012, sus miembros han recibido el apoyo de la organización para, entre otros, solicitar documentos y presentar demandas. En un futuro cercano, quieren intensificar sus actividades de defensa con el objetivo de lograr el reconocimiento, la reparación y la atención mediante servicios de apoyo para todos los antiguos residentes de estas instituciones del país.

Una «reparación» imperfecta

Unos veinte años antes de que se fundara CLAN NZ, los antiguos residentes de estas instituciones ya habían comenzado a [sacar a la luz el tema del maltrato y los abusos en las instituciones](#). En 2001, el Gobierno [emitió una disculpa y una compensación](#) para un grupo de antiguos pacientes del hospital psiquiátrico Lake Alice, después de que el informe de un juez retirado que les había entrevistado considerara creíbles sus testimonios de abusos, malos tratos y abandono. Las noticias llegaron a oídos de otros antiguos pacientes de instituciones psiquiátricas del país y el Gobierno estableció un servicio de escucha confidencial para que contaran los abusos y el maltrato que habían sufrido.

Inspirados por estas actuaciones, los antiguos residentes activistas presentaron más denuncias de abusos y malos tratos en centros de acogida. Como respuesta, el Gobierno ideó un plan universal de acuerdos, disponible para cualquiera que hubiera sufrido daños durante su estancia en estas instituciones, siempre que se demostrara la veracidad de los testimonios. Además de una compensación económica, los solicitantes podían recibir una disculpa personal y acceso a asistencia profesional limitada. El Gobierno ha pagado [17 millones de dólares neozelandeses](#), se ha disculpado con más de 1000 víctimas y ha introducido un procedimiento de evaluación rápida para lograr acuerdos. Además, todos los antiguos residentes de estas instituciones pueden ponerse en contacto con el Servicio de Escucha Confidencial y Asistencia («Confidential Listening and Assistance Service», CLAS) para contar su historia, acceder a información personal y preguntar sobre las opciones de reparación disponibles. Entre 2008 y 2015, el CLAS escuchó a 1100 sobrevivientes que sufrieron abusos y maltrato en centros de acogida entre las décadas de 1950 y 1980.

En 2016, el CLAS publicó un informe llamado [«Some Memories Never Fade»](#) («Algunos recuerdos nunca se olvidan») en el que se revelaban los abusos sexuales y el maltrato físico y psicológico que los menores sufrieron en instituciones y casas de acogida durante muchos años. Tras estos hallazgos, la presidenta del CLAS, la jueza Carolyn Henwood, pidió la creación de un organismo independiente para resolver denuncias tanto actuales como del pasado, descubrir el alcance de los abusos y los malos tratos sufridos y evitar que estas violaciones volvieran a producirse en el futuro.

No obstante, el Gobierno rechazó la recomendación final del CLAS, argumentando que el equipo de Denuncias sobre Abusos en el Pasado del Ministerio de Desarrollo Social ya se ocupaba de ello. Según el Gobierno, el «Ministerio de Desarrollo Social no halló pruebas de errores generalizados, y la mayoría de los niños y las niñas en centros de acogida no sufrieron abusos ni maltrato».¹

[Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo](#)

En noviembre de 2016, Grant West, un antiguo residente del tristemente célebre centro para niños Epuni, recibió una disculpa del Ministerio de Desarrollo Social y un pago compensatorio de 40 000 dólares neozelandeses. Sobre su infancia, [dijo](#): «Nos pusieron en un equipo de baloncesto, pero no era un equipo de baloncesto; era para que los niños saliéramos y nos prostituyéramos con hombres en el exterior. Más tarde, sufrí abusos en una casa de acogida, y a manos del líder del Ejército de Salvación; se suponía que todas estas personas tenían que ayudarme». West dijo que informó a la policía y a trabajadores sociales de los abusos en numerosas ocasiones, pero nunca actuaron. Siente que la disculpa personal no significó nada, ya que el Gobierno no había aprendido de sus errores. Presentó una petición al Parlamento de Nueva Zelanda en la que solicitaba una investigación independiente de todos los centros que acogieron a menores.

A primera vista, parecía que el CLAS y el sistema de compensación de evaluación rápida del Ministerio de Desarrollo Social funcionaban bastante bien. En esencia, el Gobierno de

Nueva Zelanda introdujo un plan de reparación para los sobrevivientes, se escuchó a muchas personas y, como resultado, se pagó una considerable cantidad de dinero. Siendo así, ¿por qué surgieron nuevas peticiones de una investigación pública?

En realidad, el alcance y el cometido del procedimiento de reparación del Gobierno eran muy limitados. El CLAS suponía una investigación prácticamente a puerta cerrada en la que la información se ocultaba al público. Según Pat McNair, de CLAN NZ: «Muchos antiguos residentes de estas instituciones no pudieron participar porque el servicio se canceló de forma prematura, y lo descubrieron demasiado tarde. La mayoría de las personas que conocían su existencia se enteraron por casualidad. Por supuesto, no apareció ni en los periódicos, ni en la televisión ni en otros medios de comunicación».

Por tanto, el alcance del CLAS era limitado. Solo el uno por ciento de más de 100 000 antiguos residentes de estas instituciones participaron en el proceso de reparación dirigido por el Ministerio de Desarrollo Social. Aún se desconoce el verdadero alcance de los abusos y los malos tratos sufridos por menores. Netta Christian, de CLAN NZ, sospecha que podría haber hasta 50 000 casos de abusos y maltrato en Nueva Zelanda, dado el número de niños y niñas que estaban en acogida y la cultura de abuso y secretismo en las instituciones implicadas.

Sonja Cooper, una abogada de Wellington, fue una de las figuras destacadas que periódicamente pidieron una investigación independiente sobre los abusos y el maltrato en el pasado en centros de acogida durante casi 20 años. Cooper cuenta con más de 800 clientes que alegan haber sufrido malos tratos en centros de acogida, y también representó a Netta Christian, para quien ganó un acuerdo extrajudicial del Ministerio de Desarrollo Social. Cooper [dijo](#): «Uno de los motivos por los que el ministerio introdujo un procedimiento de evaluación rápida para lograr acuerdos era intentar acallar las peticiones de un proceso independiente que resolviera estas denuncias».

Les conviene tener este proceso coercitivo dirigido por el propio departamento del Gobierno, donde «o lo tomas o lo dejas». Se toma un grupo de clientes bastante afectado y vulnerable, y no se acepta que hayan sufrido los abusos o los malos tratos más graves que alegan porque no hay nada documentado. Les sale bastante rentable, ¿no? —dice Cooper.

Los antiguos residentes de estas instituciones argumentaron que los funcionarios del departamento del Gobierno que permitieron los abusos no deberían decidir si sus denuncias son ciertas ni la cuantía de la compensación que los sobrevivientes deben recibir. McNair recuerda: «Todo el mundo veía que el Gobierno se investigaba a sí mismo de nuevo [...]. Desde el punto de vista de los derechos humanos, consideramos que el CLAS violó los derechos de las personas que sufrieron abusos y malos tratos en centros de acogida estatales, eclesiásticos o de beneficencia, al negarles una investigación independiente e imparcial».

Aunque los procesos de reparación iniciados por el Gobierno han brindado una resolución a algunas personas, no abordaron los problemas subyacentes ni ayudaron a garantizar que no volvieran a producirse casos similares en el futuro. En 2015, el Comisionado para la Infancia de Nueva Zelanda, Russell Wills, publicó su informe [«State of Care»](#) («Situación de la atención»), en el que se revelaba que niños separados de sus familias habían sufrido abusos sexuales y maltrato físico en hogares de acogida y que no existían pruebas de que estuvieran más seguros en centros de acogida hoy en día.

La mayoría de los antiguos residentes de estas instituciones y activistas de Nueva Zelanda han estado presionando para la creación de una Comisión Real, una investigación pública del más alto nivel que ya se ha llevado a cabo en Australia.

Una Comisión Real respondería a todas las preguntas, como por qué ocurrió, por qué no se detuvo y por qué se permitió que siguiera pasando durante tanto tiempo, y establecería nuevas medidas de protección para que no volviera a producirse —declaró Gran West.

El pueblo frente al Gobierno

Durante varios años, una mayor cobertura por parte de los medios de comunicación sobre los abusos y el maltrato en las instituciones y sobre el encubrimiento por parte de la policía, los departamentos gubernamentales, la Iglesia y las organizaciones benéficas crearon una sensación de mayor concienciación y preocupación públicas. Algunos activistas que fueron antiguos residentes de estas instituciones recopilaron miles de firmas y presentaron al menos cinco solicitudes diferentes al Gobierno o al Parlamento. Muchas otras personas y organizaciones pidieron una investigación pública, incluidos sobrevivientes de abusos en la Iglesia, representantes de la Iglesia católica, grupos maoríes, organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones de reforma penal.

A pesar de la presión, el Gobierno de Nueva Zelanda se mostraba reticente a apoyar una Comisión Real. Al contrario que en Australia, donde la Iglesia o las organizaciones benéficas dirigían muchas instituciones, la mayoría de los abusos y los malos tratos a menores en instituciones que se produjeron en Nueva Zelanda tuvieron lugar en hogares gestionados por el Estado. Por ello, al llevar a cabo una investigación en profundidad, el Gobierno se arriesgaba a arruinar su reputación, inclusive por haber implementado procesos imperfectos de reparación para los sobrevivientes. De hecho, los hallazgos del CLAS sobre el grado de abuso, maltrato y abandono en centros de acogida no se hicieron públicos hasta que Grant Mahy, un antiguo residente de estas instituciones, presentara al Gobierno una carta abierta con 326 firmas en la que solicitaba acceso a estos.

Y lo que es más sorprendente, se filtró un documento gubernamental que mencionaba

cómo el Gobierno esperaba que el número de denuncias disminuyera al tiempo que las víctimas iban «muriéndose».

Algunos activistas, entre ellos Mahy y Cooper, han presentado informes al organismo de las Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento por parte de los Estados de la legislación internacional contra las torturas, el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), el cual, en sus recomendaciones para Nueva Zelanda en 2015, instó al Gobierno a que ofreciera una reparación adecuada a las personas que sufrieron abusos y malos tratos en la infancia en el pasado durante su estancia en instituciones gestionadas por el Estado. No obstante, el Gobierno de Nueva Zelanda reiteró que: «Puesto que las denuncias [de abusos y malos tratos en el pasado] no suelen incluir denuncias de errores generalizados o institucionales, sino que predominantemente están relacionadas con incidentes concretos y experiencias personales, tal enfoque no es factible en este caso. El Gobierno también ha determinado que, por el mismo motivo, una investigación pública no es un mecanismo adecuado».²

Por último, se alcanzó un punto crucial en noviembre de 2016, cuando la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda envió al entonces Primer Ministro, Bill English, una [carta abierta y una petición](#) titulada «Nunca más» que solicitaba una disculpa y una investigación exhaustiva, independiente y pública de los abusos y los malos tratos en centros de acogida en el pasado. Veintinueve destacados neozelandeses firmaron la petición, como el Comisionado Principal de Derechos Humanos, el Comisionado sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comisionado sobre Derechos Indígenas, el Foro de Líderes Iwi, la Liga de Bienestar de las Mujeres Maoríes y cuatro partidos políticos: el Partido Laborista, el Partido Maorí, Nueva Zelanda Primero y el Partido Verde. Más de 10 000 personas firmaron la carta abierta.

El 6 de julio de 2017, se entregaron a los miembros del Parlamento, en las escaleras de este, cientos de cartas escritas a mano de sobrevivientes y fotografías de su infancia, junto con la carta abierta y una petición.

Pat McNair, de CLAN NZ, explicó: «Esto sí tuvo mucha repercusión mediática y llegó a oídos de mucha gente. Creo que hacía falta un organismo como la Comisión de Derechos Humanos, con su financiación, su personal y sus conocimientos [...], para darle un empujón a este asunto».

Aun así, el Gobierno no les escuchó. Los representantes del Partido Nacional, en el poder en ese momento, no acudieron al Parlamento para recibir la petición, e incluso aunque la posición del partido se suavizó de cierto modo posteriormente, siguieron sosteniendo que Nueva Zelanda no necesitaba una investigación. Más tarde, en septiembre de 2017, el

Partido Laborista formó un gobierno de coalición tras las elecciones generales, arrebatándole el poder al Partido Nacional. McNair señaló: «Todos los políticos sufrieron presiones durante mucho tiempo. Creo que es muy duro para cualquier político hacer oídos sordos a un problema de este calibre, así que no me sorprende que todos esos partidos políticos se dieran cuenta de que hacía falta crear una Comisión Real». En relación con el Partido Nacional, McNair dijo: «Pensaron que se saldrían con la suya diciendo siempre que no».

Anuncio de la Comisión Real

Durante su campaña electoral, el Partido Laborista dijo que Nueva Zelanda seguía necesitando mantener una «conversación nacional» sobre abusos y malos tratos en el pasado en centros de acogida y que el Servicio de Escucha Confidencial y Asistencia «no terminó el trabajo», ya que quedaban muchas víctimas por contar su historia. Por fin, el 1 de febrero de 2018, se anunció oficialmente el establecimiento de la Comisión Real de Investigación sobre Abusos en el Pasado en Centros de Acogida.

En relación con el anuncio de la Comisión Real, McNair dijo: «Estamos conmocionados, sorprendidos y entusiasmados. Siempre creímos que terminaría por llegar, pero teníamos serias dudas de que fuera durante nuestra vida».

Tanto Pat como Netta opinan que la población general «no es consciente» del alcance de los abusos y malos tratos generalizados que se produjeron desde los años 1950, y creen que todo el mundo «se sorprenderá muchísimo» cuando los hallazgos de la Comisión Real aparezcan en los medios de comunicación.

La investigación cubre orfanatos, centros de acogida, centros de detención de menores, hospitales psiquiátricos y cualquier servicio de acogida subcontratado a instituciones privadas. Es probable que se trate de la mayor Comisión Real de la historia de Nueva Zelanda, y se espera que cueste [12 millones de dólares neozelandeses al año](#).

Muchos sobrevivientes afirmaron que los procesos de denuncia gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social eran «humillantes e interminables», por lo que se espera que la Comisión Real cree un sistema de apoyo a la salud mental, en el que los antiguos residentes de estas instituciones tengan citas con consejeros y psicólogos de su elección antes, durante y después de las audiencias. La Comisión Real también contará con un grupo consultivo de sobrevivientes.

Al contrario que la de Australia, la Comisión Real de Nueva Zelanda examinará todos los tipos de abusos a menores, incluidos los malos tratos físicos y emocionales, y el abandono, no solo los abusos sexuales.

El abuso sexual siempre se subraya como «el peor abuso», pero gran parte del daño causado

es consecuencia de la propia cultura de atención en las instituciones —comenta Pat McNair.

También al contrario de Australia, donde los pueblos aborígenes tuvieron su propia investigación por separado (mediante la [investigación de las «Generaciones Robadas»](#)), Nueva Zelanda nunca ha admitido el impacto de la colonización en el pueblo maorí. Se espera que la Comisión Real tenga especialmente en cuenta a los niños y las niñas maoríes, que constituyen el 61 por ciento de los menores en acogida.

No obstante, se enfrenta a ciertas críticas. A los antiguos residentes de estas instituciones les preocupa que la investigación se haya hecho demasiado rápido desde el principio, ya que dos o tres años simplemente no bastan para que las víctimas den un paso al frente. Los sobrevivientes también critican que el marco temporal propuesto, los años entre 1950 y 1999, excluiría a algunos antiguos residentes mayores o más jóvenes. Opinan que el objetivo debería ser que todos los antiguos residentes que sigan vivos pudieran participar.

Qué depara el futuro

Actualmente, CLAN NZ es el único grupo independiente de apoyo y defensa de las víctimas de Nueva Zelanda que trabaja por la justicia y la reparación para los antiguos residentes de estas instituciones, y planea ampliar sus actividades ahora que la Comisión Real está en camino.

Netta Christian está decidida: «Creo que no está bien que se cometan delitos contra niños y niñas inocentes y nadie pague por ello. Voy a dedicarle mi vida a esto hasta que muera».

Tanto Netta Christian como Pat McNair esperan que la Comisión Real lleve a una disculpa nacional y al establecimiento de un plan de reparación universal, [como en Australia](#). Según ellas, es importante que en esta disculpa se reconozca públicamente la existencia de injusticias a gran escala y se acepte la responsabilidad del Estado, además de que sirva como promesa de que este tipo de violaciones no se repetirán. CLAN NZ sostiene que el plan de reparación debe incluir una compensación justa para los antiguos residentes que cubra diferentes servicios, desde tratamiento y asesoramiento médico hasta alojamiento y educación, así como financiación para conmemoraciones y homenajes.

Se necesita un plan de reparación porque muchos antiguos residentes de estas instituciones simplemente no pueden acudir a los tribunales para solicitar una compensación. La jueza Carolyn Henwood, antigua presidenta del CLAS, [dijo](#): «He visto a algunas personas, que han pasado por el sistema de salud mental o sufrido abusos, malos tratos o abandono, que no podrían enfrentarse a un juicio. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Hay que entender que algunos de los casos que escuchamos son muy muy graves. Puedes verte frente a alguien que ni siquiera se quita el abrigo por lo que sufrió en la infancia. O que no sale de casa porque fue violado muchas veces de niño».

La Comisión Real también abogaría por que se cubran otras lagunas para beneficio de los antiguos residentes. Por ejemplo, es necesario recopilar una lista exhaustiva de antiguos centros de menores. Después, hay que mejorar el acceso a los registros infantiles; estos

registros no se consideran propiedad de los antiguos residentes de estas instituciones y el proceso para acceder a ellos es a menudo confuso. Además, los plazos de prescripción para los sobrevivientes de abusos en la infancia han de derogarse; en la actualidad la mayoría de los y las demandantes solo pueden emprender acciones legales seis años después de que se produzca el delito. Todos estos procedimientos ya han tenido lugar o están llevándose a cabo en Australia.

Para ello, CLAN NZ ha emitido notas de prensa, ha escrito declaraciones, ha enviado cartas a editores, ha hablado con otros activistas antiguos residentes de estas instituciones, ha contactado con parlamentarios, se ha reunido con representantes de iglesias y organizaciones y se ha puesto en contacto con investigadores y abogados. También ha asistido a manifestaciones, concedido entrevistas a periodistas y autores, y creado una red de contactos con un grupo amplio y diverso de personas que han vivido en acogida durante su infancia.

No obstante, para llevar su lucha al siguiente nivel, la organización necesita dinero. Al tratarse de una rama de un grupo australiano, CLAN NZ no cumple los requisitos para solicitar financiación en Nueva Zelanda, y tampoco puede utilizar fondos australianos. Para solucionar esto, Pat y Netta crearon la Fundación de Antiguos Residentes de NZ («NZ Care Leavers Trust»), que puede solicitar subvenciones en Nueva Zelanda.

No obstante, no hay muchos donantes que se planteen financiar este tipo de organización. Pat McNair dijo: «Puesto que el Gobierno paga la Comisión Real, clasifican nuestro trabajo como político. No creo que sea en absoluto político». Espera que el Gobierno asigne algo de dinero a grupos como el suyo una vez que la Comisión Real empiece a funcionar, igual que ocurrió en Australia.

Mientras tanto, el equipo de CLAN de Australia sigue proporcionando un consejo y una ayuda inestimables a los antiguos residentes de estas instituciones de Nueva Zelanda. McNair declaró: «Es bueno tener un mentor. Nos reunimos cada mes a través de Skype e intercambiamos mensajes de correo electrónico. Ellos ya han pasado por todos estos procedimientos con pequeñas diferencias y pueden aconsejarnos sobre todo tipo de asuntos».

¿Qué consejo les daría CLAN NZ a los antiguos residentes de estas instituciones de otros países que quieran emprender la lucha, pero no sepan por dónde empezar?

McNair sugiere lo siguiente: «Empieza con un pequeño grupo de apoyo al principio. No intentes crecer demasiado rápido. Haz tantos contactos como sea posible. Utiliza las redes sociales; es gratis. Envía artículos interesantes y relevantes a los periódicos y las televisiones; también es gratis. Si es posible, encuentra un

mentor y ve aprendiendo. Y, lo más importante, nunca te rindas».

Referencias:

1. Murray S., «Supporting Adult Care-Leavers: International Good Practice», Bristol Policy Press, 2015, 53.
2. Murray, 54.